

CAPITALISMO Y CONTAMINACION

Eduardo Turrent

El domingo 14 de octubre se publicó en la Letra y la Imagen una reseña sobre el libro "El Medio Ambiente en México y América Latina". En la misma se hace una afirmación que disgustó a algunos lectores, y es la siguiente:

"En unas ponencias del libro se sugiere que el deterioro del medio ambiente es resultado directo del sistema capitalista. Esta afirmación es obviamente exagerada, ya que como en otra parte del libro se afirma: En realidad los problemas ambientales son comunes tanto al sistema de producción capitalista, como al socialista. Esto es porque el sistema socialista aún no ha inventado una tecnología propia que no contradiga las leyes de la naturaleza..."

Lo anterior es correcto. Aristóteles comentó alguna vez "que no hay arte de lo general ni ciencia de lo particular". Sin embargo, a pesar de que en todos los sistemas económicos prevalece "la misma ciencia", los procedimientos y la mecánica de las decisiones económicas —al menos de las productivas— varían de un modo de producción a otro. Esta diferencia es especialmente notable entre las naciones capitalistas y las sociedades de economía centralmente planificada. Este planteamiento permite abrir algunos cauces analíticos para entender la cuestión. Específicamente, el problema se sitúa en los mecanismos inherentes a cada uno de esos sistemas en lo que se refiera a la toma de las decisiones de inversión.

Toda inversión produce, por definición, efectos internos y externos: unos que repercuten sobre la propia empresa y otros que sólo implican una incidencia exterior. De hecho, se puede decir que todo acto económico, sea de producción o de consumo, genera "externalidades", y éstas pueden ser destructivas o benéficas. Este factor adquiere su máxima relevancia tratándose de la inversión, sea ésta una nueva fábrica, una carretera o una presa. Todas las inversiones generan tanto "externalidades" positivas, llamadas economías externas, como "externalidades" negativas o deseconomías externas. Este concepto provee una buena pista para entender la naturaleza del eslabón existente entre la contaminación y el sistema capitalista.

El sistema capitalista opera en base a la actuación independiente y libre de sus agentes económicos naturales: los consumidores y los empresarios. Las decisiones de producción emanan de los empresarios; ellos, guiados por la motivación del lucro, deciden cuáles proyectos de inversión deben cristalizar y cuáles no.

Históricamente, este proceso decisorio ha mostrado su capacidad para ignorar algunas "externalidades" inherentes a la inversión. Uno de los autores que ha analizado este fenómeno con más profundidad y acierto es Albert Hirschman, quien indica que esta falta de "incorporación de costos" ha sido la responsable del acelerado crecimiento económico obtenido bajo el capitalismo:

" . . . desde el punto de vista de los incentivos para la inversión, el sistema capitalista no tiene igual, especialmente tal como existió en el siglo XIX: con un mínimo de interiorización de las deseconomías externas, y sin ninguna limitación a la interiorización de las economías pecuniarias externas a través de adquisiciones, combinaciones o fusiones con actividades económicas de una estrecha interdependencia . . . En otras palabras, la responsable de los cambios económicos fue en gran parte la peculiar falta de interiorización implícita en el sistema de la empresa privada —la forma en que las instituciones de ese sistema escondían ciertos costos de los empresarios—"¹

El "quid" del asunto radica entonces en que, en cualquier sociedad, la inversión, la modernización y el crecimiento conllevan altos costos, especialmente para la comunidad en general. Hirschman señala que:

¹ Albert Hirschman, *La Estrategia del Desarrollo Económico*, México: Fondo de Cultura Económica 3a. reimpresión, 1973, p. 66

“... por lo general, desarrollo económico quiere decir transformación en lugar de creación *ex-novo*: trae consigo la interrupción de la manera tradicional de vivir, producir y hacer las cosas, en la que siempre han ocurrido muchas pérdidas; las habilidades antiguas se hacen obsoletas, las viejas industrias se arruinan, los barrios bajos de las ciudades proliferan . . . Y muchos otros costos sociales deben añadirse a estos, desde la contaminación del aire hasta el desempleo.”²

Sin menoscabo de las demás externalidades descritas, vale la pena centrar la atención en el problema del deterioro ecológico. Es claro que la contaminación ambiental producida por toda actividad económica, en especial por la industria, se manifiesta en forma externa a la empresa que la genera; es decir como un costo social y no privado. El hecho de que una fábrica arroje a la atmósfera humos tóxicos no aumenta sus costos de producción, lo mismo sucedería con una nucleoelectrónica que radioactivizara las aguas de un río cercano. Por lo anterior, se podría concluir que el sistema capitalista resulta ser más contaminador que el socialista. Y esto sería así porque el socialista, al operar en una situación de planificación central, es capaz de interiorizar deliberadamente tanto las deseconomías como las economías externas de la inversión. Es evidente que una interiorización total, a más de ser difícil, puede inhibir el crecimiento económico en lugar de fomentarlo. Pero independientemente de este punto, y a pesar de lo que se pudiera creer, la cuestión dista mucho de estar totalmente aclarada. Hay dos razones para ello, la primera proviene de las dificultades inherentes a una interiorización total. Es obvia la complicación, incluso para una burocracia experta, de dar cuenta de todas las repercusiones tanto económicas como sociales que un proyecto o un plan de inversión puede implicar. En particular, es muy probable que, por razones evidentes, una agencia de planificación esté más interesada en definir e incorporar cierto tipo de costos externos en detrimento de otros. Hirschman sostiene que:

“... como es probable que la mayor parte de las decisiones productivas en una economía de este tipo se tomen dentro de un amplio marco industrial de referencia, se tendrán en cuenta los intereses de las empresas existentes. Los administradores de una industria se identificarán con estas empresas, con sus trabajadores y con el valor sin amortizar de sus máquinas, y es difícil favorezcan cambios violentos que pudieran interferir con planes cuidadosamente trazados que signifiquen también la obsolescencia prematura de técnicas y equipo. Así, a este respecto una economía planificada quizá se conduzca de manera muy similar al

² *Op. cit.*, p. 64.

sistema de gremios; por constitución el proceso de 'destrucción creadora' es ajeno al sistema puesto que en él la destrucción quiere decir autodestrucción, más que la destrucción de algún otro. . . Por lo tanto, puede esperarse que una sociedad que centraliza sus decisiones de inversión abogue en contra de la introducción de aquellas innovaciones que pudieran ocasionar pérdidas a los productores existentes mejorando el diseño y la calidad de la producción corriente y, diversificándola con la introducción de sustitutos".³

En suma, dentro de la planificación interviene la consideración del acervo de capital existente, además de la situación y los intereses de ciertos grupos sociales, quizás detentadores de algún poder político, que podrían verse perjudicados por las nuevas inversiones. Se antoja mucho más difícil identificar social y políticamente a los perjudicados por la contaminación ambiental que esas inversiones producirían y que en última instancia resultaría ser la comunidad en el agregado, que discurrir, por ejemplo, cuáles procedimientos quedarán obsoletos como consecuencia de una nueva tecnología. Además, por las dificultades de identificación, es muy improbable que los grupos afectados por el deterioro ambiental puedan ejercer algún poder político efectivo para defender sus intereses. Sin embargo, por muy discutible que todo ello pueda ser, el argumento central es que no se tiene ninguna seguridad "a-priori", de que las economías socialistas, sólo por ser centralmente planificadas, interiorizarán eficientemente los costos ecológicos del desarrollo económico.

Pero la cuestión no termina ahí, si así fuera, el panorama resultaría mucho menos complicado de lo que en realidad es. A pesar de que por su funcionamiento "natural" el sistema capitalista tienda a "ignorar" las externalidades, las naciones capitalistas modernas han sido capaces de desarrollar métodos, principalmente a través de la legislación, para "forzar" al sistema a interiorizar los costos externos de la inversión, y ello independientemente de la concientización de los ciudadanos acerca de estos problemas. Resulta lógico que este proceso sea mucho más efectivo en los países capitalistas avanzados que en aquellos en vías de desarrollo. A pesar de la corrupción, de la ineficiencia administrativa y de otros obstáculos, es incontrovertible que los países en desarrollo están siguiendo la ruta de las naciones más adelantadas, o sea la de los países pioneros. El ejemplo más sobresaliente de este proceso es el de los Estados Unidos. La revista *Time*, al comen-

³ *Ibid.*, pp. 66-68.

tar en un artículo que "el alto costo de la reglamentación gubernamental se ha convertido en una de las fuentes de mayor angustia para las corporaciones", cita un estudio realizado por el economista republicano Murray Weidenbaum.⁴ Según este investigador, únicamente la reglamentación federal hizo incurrir a la industria norteamericana en un costo anual de 79 mil millones de dólares. La Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget) estimó ese gravamen en 135 mil millones de dólares. El mismo escrito menciona una investigación realizada, para un grupo de 48 empresas, las cuales estudiadas en relación al incremento en costos ocasionado por los controles provenientes de exclusivamente seis agencias y programas de carácter federal; leemos:

"Costo total: 2.6 miles de millones de dólares, que equivale al 16% de las utilidades netas de esas compañías, al 10% de sus desembolsos en capital y al 40% de su presupuesto en investigación y desarrollo. . . El estudio concluyó que la Agencia para la Protección Ambiental [Environmental Protection Agency] fue responsable del 77% del incremento a los costos, mientras que la tan criticada Administración para la Seguridad y Salud Ocupacional [Occupational Safety and Health Administration], cubrió solo 7% de ese monto. Las regulaciones impuestas por la Comisión para la Igualdad en las Oportunidades de Empleo [Equal Employment Commission] cubrió 8% del total, el Departamento de Energía 5%, El Seguro para la Pensión de los Jubilados [Employee Retirement Income Security] 2% y la Comisión Federal para el Comercio [Federal Trade Commission] el 1%".⁵

En conclusión, el presente artículo no está encaminado a proporcionar respuestas; sino a motivar preguntas e hipótesis. La cuestión discutida dista mucho de estar resuelta. Es necesario realizar investigaciones teóricas como empíricas, y evaluar los esfuerzos de los gobiernos para controlar la cuestión ambiental. Sería particularmente interesante indagar lo que se ha hecho y lo que se está haciendo en los países socialistas, en torno al deterioro ecológico causado por el desarrollo ■

⁴ "Expensive Rules, For 48 firms: \$2.6 billions", *Time*, March 26, 1979, p. 42.

⁵ *Op. cit.*